Proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas (Boletín N°11850-04)

(I) Principales puntos de la iniciativa y antecedentes para su discusión

- El proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas consta de un **artículo único que busca modificar el artículo noveno de la Ley General de Educación N° 20.370 de 2009.**
- En su parte declarativa, establece un **artículo permanente que busca velar por la participación en igualdad de derechos de hombres y mujeres en las comunidades educativas**, en los distintos establecimientos públicos y privados, sin que el género sea razón de exclusión.
- Lo anterior, se decidirá mediante **un proceso informado, participativo y vinculante** donde todos los integrantes de la comunidad educativa (Consejo Escolar u organismo de similares características) puedan decidir si mantienen la condición de monogénicos o adquieren la condición de mixtos. Este proceso queda resguardado en la disposición transitoria que contiene el proyecto.
- La disposición transitoria, además, establece que los establecimientos educacionales tendrán un **plazo de dos años** desde la publicación de la ley para llevar a cabo este proceso. (Gradualidad).
- En Chile los colegios monogénicos son cada vez menos, hoy sólo representan el 4,4% de la matrícula. El número de establecimientos de este tipo ha disminuido un 35% en los últimos 7 años. (Educ2020). Datos que indican que esta realidad va a la baja.
- Esta iniciativa debe valorarse desde la perspectiva de la lucha para la erradicación de la discriminación por género y el sexismo, y para la igualdad entre mujeres y hombres, pero también desde la perspectiva de la calidad educativa. En este sentido, no hay evidencia sustantiva que respalde la segregación por género en las escuelas, asimismo, no se han identificado mayores diferencias en resultados académicos, convivencia, desarrollo socioemocional, entre otras. (Educ2020).
- **Importancia de la gradualidad (recogida en la moción parlamentaria)** ya que los cambios culturales no son automáticos. Se requiere de diálogo y reflexión en las comunidades

educativas, además de formación docente, directivos y otros profesionales de la educación para el cambio de prácticas pedagógicas y de infraestructura.

(II) Argumentos ante posibles problemas de constitucionalidad

- Cabe señalar que el artículo 9° de la LGE no ha sido considerado como norma propia de ley orgánica constitucional por el TC. No obstante, se alega que las modificaciones que introduce el presente proyecto de ley, por aplicársele a todos los establecimientos educacionales, se convertirían, solo por dicha razón, en un requisito para el reconocimiento oficial (RO).
- Si bien la lógica de este argumento (convertir cualquier modificación a la LGE en “equivalente funcional” de los requisitos del RO y, de este modo, en norma de quórum de 4/7) ha sido utilizado en otras ocasiones y de forma eficaz, en este caso el uso extensivo del argumento lo vuelve absurdo. Siguiendo la lógica pretendida, cualquier regulación (ya sea una nueva ley aprobada por el Congreso, pero también una norma dictada por el MINEDUC o la Superintendencia de Educación) que le sea aplicable a todos los establecimientos, pasaría a ser (por el solo hecho de ser obligatoria para todos los establecimientos) un nuevo requisito del reconocimiento oficial. Evidentemente, el solo factor de a quiénes se le aplica no es por sí sólo suficiente, sino que se requiere de un elemento de contenido.
- Ahora bien, resulta difícil ver cómo la obligación de llevar a cabo un proceso de reflexión informado y participativo al interior de una comunidad educativa (que es la única obligación nueva que establece esta moción y que se relaciona con el principio de participación establecido en la misma LGE), puede ser considerado un requisito para el reconocimiento oficial en cuanto a su contenido.
- Por lo tanto, no queda sino concluir que lo que se estima –erradamente- que constituiría un nuevo requisito del reconocimiento oficial es que la comunidad educativa deba “velar por la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos y por la provisión de una educación no sexista”
- No obstante, el deber de “velar por la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos y por la provisión de una educación no sexista” no es diferente, en cuanto a su carácter jurídico, del deber que tienen las comunidades educativas (o cualquier comunidad o ciudadano) de respetar los principios y derechos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales ratificados por Chile. La moción no establece un nuevo requisito jurídico, sino que reafirma un principio ya vigente en nuestro ordenamiento.